

CIUDADES

Volúmen 7

Arturo Almandoz
Editor

Caracas, de la metrópoli súbita a la meca roja



OLACCHI

Organización Latinoamericana
y del Caribe de Centros Históricos

Editor general
Fernando Carrión

Coordinador editorial
Jaime Erazo Espinosa

Comité editorial
Fernando Carrión
Michael Cohen
Pedro Pérez
Alfredo Rodríguez
Manuel Dammert G.

Diseño y diagramación
Antonio Mena

Edición de estilo:
Alejo Romano
Ana Aulestia

Impresión
V&M Gráficas

ISBN: 978-9978-370-29-2
© OLACCHI
El Quinde N45-72 y De Las Golondrinas
Tel.: (593-2) 2462 739
olacchi@olacchi.org
www.olacchi.org
Quito, Ecuador
Primera edición: diciembre de 2012

Contenido

Presentación	7
------------------------	---

Introducción

Caracas, entre la ciudad guzmancista y la metrópoli revolucionaria	9
<i>Arturo Almandoz</i>	

I. Desarrollismo, metropolitanización y modernidad

Modernidades alternas del urbanismo caraqueño: Territorio, arquitectura y espacio urbano	29
<i>Lorenzo González Casas</i>	

Caracas, modernidad y escala urbana: Una aproximación interdisciplinaria	73
<i>Nancy Dembo, José Rosas e Iván González V.</i>	

Modernidad urbanística y Nuevo Ideal Nacional	95
<i>Arturo Almandoz</i>	

II. De la Venezuela saudita al Caracazo

Desarrollo urbano y vivienda: La desordenada evolución hacia un país de metrópolis . . .	105
<i>Víctor Fossi Belloso</i>	

Del sistema de ciudades venezolano 127
Marco Negrón

Caracas: De la Colonia al socialismo del siglo XXI.
Espacio, clase social y movimientos ciudadanos 155
María Pilar García-Guadilla

III. Hacia la Caracas roja

Espacio y dinámica de la ciudad violenta 199
Silverio González Téllez

Caracas: Su sistema de transporte y movilidad 213
Josefina Mundó Tejada

El crecimiento urbano y la pérdida
de los valores ambientales 235
Rosa María Chacón

La cultura constructiva informal y
la transformación de los barrios caraqueños 263
Iris Rosas Meza

Espacio, revolución y resistencia:
Lugares ordinarios y eventos
extraordinarios en Caracas 285
Clara Irazábal y John Foley

Caracas: De la Colonia al socialismo del siglo XXI. Espacio, clase social y movimientos ciudadanos¹

María Pilar García-Guadilla*

Espacio y sociedad

El proceso de producción de la ciudad y su configuración socioespacial son el resultado de la interacción de los distintos actores que se expresan en el espacio y entre los cuales destacan: el Estado, que actúa mediante la planificación urbana o la elaboración de los instrumentos de ordenación con el fin de regular el proceso de ocupación del espacio; el libre juego de las fuerzas del mercado, que se expresa en los procesos engañosamente liberales o “espontáneos” de la localización óptima de las actividades económicas, de infraestructura y residenciales; el costo, la valorización y la disponibilidad de la tierra urbanizable y de la vivienda; y las clases sociales o fracciones de clase que orientan la lógica de ubicación de las actividades dentro de las limitaciones que imponen las políticas del Estado y la lógica del mercado.

Uno de los objetivos de este trabajo es analizar la producción social del espacio de Caracas de acuerdo con el enfoque de actores sociales dentro de una perspectiva histórica que dé cuenta de los conflictos sociales resultantes de la apropiación del territorio urbano. Para ello, se delimitaron cuatro períodos o tiempos: la Colonia, la República, el capitalismo de Estado petrolero —que va desde su origen hasta la crisis del capitalismo liberal— y el socialismo petrolero del siglo XXI. Adicionalmente al enfoque de actores y de clases sociales, para analizar el período actual, se profundiza en el enfoque de la polarización social.

1 El presente texto es una versión revisada, ampliada y actualizada de García-Guadilla (1994).

* Es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar (USB), Caracas. Dirección electrónica: mpgarcia@usb.ve.

Los distintos actores sociales o agentes urbanos se ubican en el espacio según su poder diferencial para decidir tanto su localización residencial como la de las actividades económicas. De esta manera, poder, ideología, valores e intereses (sean estos del Estado o de las clases sociales) producen tanto el espacio planificado mediante la zonificación y los planes de ordenamiento como el no planificado, resultante de las invasiones y construcciones de las áreas pobres o marginales².

El enfoque de dependencia interpreta el espacio latinoamericano como el resultado de la articulación de los diferentes tipos de dominación que han marcado la historia del continente; por consiguiente, el sistema urbano puede entenderse como la concreción espacial de un sistema regional que está condicionado por la formación social entendida como la interacción entre las estructuras económica, social, política y cultural-ideológica, con sobredeterminación de la económica. Este enfoque no excluye al de actores ni al de clases sociales; por el contrario, introduce una perspectiva histórica que permite combinarlos.

Tal como ya se señaló, para analizar la producción social del espacio de la ciudad de Caracas se delimitaron cuatro períodos o momentos: la Colonia, la república, el capitalismo petrolero de Estado y la crisis del capitalismo liberal, y el socialismo petrolero del siglo XXI. Nos referiremos brevemente a la Colonia y a la República agrupándolas en un solo enunciado debido a sus semejanzas concernientes a la dinámica urbana, centrándonos en los dos últimos períodos —que se vinculan mayormente con la emergencia, el desarrollo y la consolidación de los actuales actores urbanos—, intentando analizar los efectos del proceso de apropiación del espacio de Caracas e identificando las demandas de ciudadanía. Se delinearé brevemente la etapa actual del socialismo petrolero del siglo XXI.

-
- 2 Desde hace 30 años se vienen analizando los mapas socioespaciales y la dinámica urbana de las distintas urbanizaciones y barrios de Caracas a través de las cátedras de Sociología Urbana, Dinámica Social Urbana, Planificación Estratégica y Talleres de Actores Urbanos. Para levantar tales mapas, combinamos los enfoques de actores sociales, clase social y conflicto urbano con las técnicas de la ecología urbana. Este capítulo se basa en la generalización de innumerables experiencias de trabajo desarrolladas en la ciudad de Caracas a lo largo del período 1978-2008.

La Colonia y la República

El período colonial se inició con la consolidación de la conquista por parte de los españoles y terminó con la independencia de Venezuela en 1821. Durante la mayor parte de la Colonia, Caracas fue sede de la provincia de Venezuela, donde se asentaron las élites y los poderes políticos y religiosos. El período republicano comenzó con la independencia y terminó con la transformación de la base económica, de agrícola a petrolera, en la década de 1930, y se caracteriza por ser una de las etapas de mayor desintegración espacial y sociopolítica en la historia venezolana.

Configuración espacial y actores sociales

Como el resto de las ciudades coloniales y, por lo tanto, dependientes de España, Caracas fue designada capital con una triple función direccional: a) ejercer el gobierno político y la administración económica de los recursos naturales que se explotaban en la provincia de Venezuela; b) poblar de manera limitada el territorio; y c) ejercer el comercio —fundamentalmente con la metrópoli española— a través del puerto de La Guaira. Estas funciones de carácter político, administrativo y residencial crearon una configuración espacial “dependiente” y contribuyeron a la débil articulación de Caracas con el resto del territorio y las ciudades de la provincia, debido a que su conexión más importante era con España. También, contribuyeron a la macrocefalia que persiste hasta hoy en día.

La configuración espacial de Caracas se desarrolló bajo el sistema de cuadrícula, es decir, de manzanas cuadradas que, partiendo de la plaza Mayor, el centro, se extendían de manera ordenada y simétrica en forma de círculos concéntricos (Gasparini, 1968, 1978 y 1991; Zawisza, 1968 y 1997; Hardoy, 1972). Alrededor de la plaza se ubicaban las edificaciones más importantes de los poderes político, eclesiástico y económico, representantes del rey de España. Los mapas socioespaciales de la época muestran que, a medida que la ciudad se extendía y se alejaba de la plaza Mayor, la posición de sus habitantes dentro de la estratificación social iba disminuyendo.

El enfoque ecológico espacialista de los modelos sociourbanos propuestos por la Escuela de Chicago explica la razón por la cual las actividades dominantes tienen la mejor ubicación y la mayor centralidad, mientras que el enfoque de actores sociales da cuenta de por qué los actores con mayor poder pueden decidir su localización residencial, así como la del resto de las actividades. La combinación de estos dos enfoques resulta sumamente útil para interpretar el patrón socioespacial de la Caracas colonial: durante este período no solo las actividades más importantes adquieren centralidad, sino que también los actores sociales con mayor poder se asientan en las localizaciones centrales y la actividad residencial compite con las otras actividades.

En términos jurídicos, el sistema de estratificación social predominante del período colonial fue el estamental, con tres grupos principales:

- Los blancos, que constituían la cúspide de la pirámide social, estaban representados por los españoles peninsulares que detentaban el poder político, junto a los criollos descendientes de los blancos peninsulares, quienes detentaban el poder económico.
- Los indígenas, protegidos bajo el régimen de encomienda.
- Los esclavos afro, traídos para trabajar en las plantaciones de cacao y café y que constituían la base de la pirámide social.

Sin embargo, en la realidad extrajurídica, los estamentos se mezclaron entre sí y produjeron los “pardos”, que aglutinaban un mestizaje muy variado compuesto por zambos, prietos, cuarterones, quinterones y saltatrás, de acuerdo con la mezcla de español, indígena y afro predominante y el color resultante (Brito Figueroa, 1987).

Los blancos peninsulares estaban asentados en las ciudades donde ejercían el control político, su principal ocupación. Aun cuando el poder económico de los criollos estaba en las haciendas del medio rural, estos también residían en las ciudades. Los pardos vivían en estas porque sus ocupaciones eran las de prestar servicios a los blancos criollos y peninsulares y, además, podían desempeñar algunas labores de comercio. Los indígenas y afros constituían principalmente la mano de obra

agrícola y habitaban en el medio rural; algunos residían en las ciudades y eran empleados en las labores de servicio doméstico.

Cada uno de estos grupos tenía una ubicación bien definida dentro del espacio cuadricular de Caracas, cuyo patrón planificado, semejante al de otras ciudades latinoamericanas, fue implantado por España: los blancos peninsulares y sus descendientes, los criollos, ocupaban las ubicaciones más centrales y de mayor estatus; los pardos y, en general, los mestizos ocupaban la periferia caraqueña, donde también vivían los “blancos de orilla”. De la misma manera, la distribución interna de la vivienda de las familias de más alto estatus respondía a los papeles de cada miembro; los indígenas y esclavos habitaban las dependencias de servicio construidas en el mismo solar de la casa de los amos.

Durante el período republicano, la configuración espacial y social de la ciudad se mantuvo sin grandes cambios (Almandoz, 1997). Los procesos de empobrecimiento generados por las guerras federales, el bajo crecimiento e, incluso, el decrecimiento de la población, mermada por el hambre y las enfermedades, influyeron indirectamente en la pérdida de primacía y prestigio de Caracas y en su consiguiente empobrecimiento y deterioro.

Movimientos sociales y ciudadanos

Encontramos dos tipos de movimientos sociopolíticos: movimientos ciudadanos que fueron fundamentalmente de las élites criollas a favor de la independencia y movimientos en la búsqueda de ciudadanía por parte de los esclavos afro. Los primeros, que fueron de gran trascendencia política, se gestaron en la capital, puesto que ambos actores (representantes de la Corona española y élites criollas) tenían allí su sede. Los segundos se originaron en las haciendas, es decir que tenían un carácter rural; apenas tuvieron significación, puesto que la liberación de esclavos vino por decreto del Libertador y no como consecuencia de enfrentamientos entre actores.

Durante el período republicano se dieron numerosas guerras internas y movimientos de carácter personalista y caudillista que fracturaron el territorio venezolano. Muchos de los caudillos eran de procedencia rural y vivían fuera de Caracas. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) se inició la explotación del petróleo y la unificación política del país, dividido por las guerras intestinas.

Capitalismo de Estado y petróleo

Desarrollo y consolidación del modelo de renta petrolera y sus impactos en los actores y en el espacio sociourbano (1930-1989)

A fines de los años veinte y comienzos de los treinta se inició el período petrolero, caracterizado por el crecimiento demográfico y los procesos de modernización y urbanización cuyo soporte político, económico, social y físico estaba en la ciudad de Caracas. La conformación del Estado-nación, la transformación de la economía —de agrícola a petrolera—, las exigencias de infraestructura moderna y eficiente y el asentamiento de los poderes político y económico en la capital generaron agudos procesos de crecimiento poblacional y de centralización demográfica, política, económica y social, los cuales marcaron fuertemente la configuración socioespacial caraqueña.

En este período se acentuó la macrocefalia, la hiperurbanización y la primacía de Caracas sobre el resto de las ciudades. Se generaron fuertes corrientes migratorias del campo a la ciudad y, en un período de apenas treinta años, la distribución de la población venezolana pasó de un 30% urbano en los años treinta a un 30% rural en los sesenta. Las corrientes migratorias, junto con los elevados índices de crecimiento poblacional de Caracas, contribuyeron al crecimiento demográfico explosivo y a la pobreza urbana de la metrópoli.

A pesar de algunos intentos de planificación puntual del Estado —que, por lo general, contribuyeron a acentuar la segregación intraurbana, el alto crecimiento poblacional, producto de las altas tasas de natalidad— la

reducción de la mortalidad y las migraciones rurales hacia la capital, trajo como consecuencia extensas zonas de marginalidad y el aumento vertiginoso de los barrios pobres. Las restricciones topográficas del valle de Caracas que imponen fuertes limitaciones a las necesidades de espacio para albergar el alto crecimiento demográfico y localizar las nuevas actividades económicas, administrativas y políticas

llevaron a que la tierra urbanizable adquiriera un alto valor de cambio y resultara inaccesible para los migrantes rurales, que terminaron invadiendo las colinas adyacentes y periféricas. Estos factores, junto con las decisiones de localización residencial de la capa hegemónica, contribuyeron a que la expansión metropolitana siguiera un patrón lineal alargado y disperso que generó altos costos económicos para la dotación de infraestructura de servicios básicos y sociales.

A partir de los años cincuenta, las transformaciones de la base económica —de agrícola a petrolera— modificaron el patrón socioespacial de la capital: por un lado, la reestructuración de la clase social alta, cuyo poder se basaba en las haciendas; por el otro, la aparición de una nueva clase alta, asentada primordialmente en Caracas y asociada con el petróleo o con los procesos de modernización económica. Esa clase alta se asentó en las mejores ubicaciones desde el punto de vista paisajístico y ecológico de la ciudad capital, y utilizó un patrón de crecimiento horizontal en dirección noreste. Este patrón horizontal de poblamiento, que estaba vinculado con las limitaciones topográficas del valle de Caracas y que tendió a aumentar los costos de la infraestructura urbana, fue posible gracias al desarrollo, por parte del Estado, de las infraestructuras necesarias, sobre todo de las grandes avenidas y vías de acceso a las urbanizaciones de clase media. Tales urbanizaciones fueron construidas por el sector privado o el “mercado”.

La migración de la población rural hacia las ciudades, principalmente Caracas, conformó el denominado “sector marginal” que se ubicó en las colinas o “cerros” de la capital, donde existe alto riesgo geológico. Las limitaciones de espacio urbanizable también trajeron como consecuencia la construcción de soluciones habitacionales para las personas de escasos recursos, mediante la política de grandes superbloques en los

años cincuenta, sesenta y setenta. No obstante, en el caso de Caracas, estos superbloques y políticas habitacionales no fueron suficientes para resolver el problema de vivienda de la población de escasos recursos, la cual hasta los años ochenta manifestó elevadas tasas de crecimiento demográfico debido a la alta natalidad y a los altos índices de migración hacia la capital desde las ciudades pequeñas y medianas e, incluso, del campo. A medida que la población migraba en grandes proporciones hacia la capital, el precario acceso a la tierra llevó a que los migrantes se asentaran en terrenos inestables con alto riesgo de derrumbes y deslizamientos o en el lecho de quebradas proclives a inundación, como es el caso de muchos barrios pobres de Caracas.

También se observó la emergencia de un sector de clase media de base urbana asociado con la economía “moderna”, fundamentado en el sector terciario o de servicios; esta clase media tendió a ubicarse cerca de la clase alta, pero, a diferencia de esta, utilizó un patrón de alta densificación denominado “propiedad horizontal”.

Configuración espacial y actores sociales

A partir de los años treinta, y como consecuencia de la economía petrolera, se dan los mayores impactos de los agentes urbanos sobre la estructura espacial de Caracas. En primer lugar, el Estado influyó a través del capitalismo predominante, fundamentado en la renta petrolera que percibía, y de las políticas de planificación urbana que desarrolló. También lo hizo mediante su participación en la construcción de urbanizaciones y de grandes desarrollos de vivienda masivos y públicos para la población de escasos recursos que vivía en condiciones de marginalidad y pobreza. Por otro lado, la bonanza petrolera y los procesos acelerados de modernización generaron una clase media urbana significativa, con altos requerimientos de vivienda y servicios que fueron atendidos por el mercado, aunque en ocasiones el Estado facilitó créditos subsidiados para la vivienda y costeo la infraestructura de servicios.

Por su parte, las clases sociales afectaron diferencialmente la estructura urbana de Caracas según su poder económico y según su tamaño: la clase alta, mediante la capacidad económica para decidir su localización residencial y la localización del resto de las actividades económicas en que se involucraron como actores económicos; las clases medias, por su decisión de seguir a las clases altas, por la importancia que se les asignó dentro de la democracia inaugurada en 1958 y por su rol como técnicos o planificadores de la ciudad de Caracas al servicio del Estado; los grupos de menores ingresos, que constituían la clase social más numerosa, mediante la invasión y construcción de extensas áreas marginales que han dado una fisonomía característica a los cerros o barrios pobres que rodean a la metrópoli. Si bien el Estado y las clases sociales han afectado sustancialmente la conformación espacial de Caracas según su poder de decisión sobre la estructura espacial, su ubicación residencial y el impacto visual y ecológico de la solución habitacional, cada clase social o fracción de la misma ha influido de forma diferente.

La capa hegemónica

La capa hegemónica o de más altos ingresos es la dueña de las tierras urbanas más costosas, extensas y mejor ubicadas. Percibe plusvalías por aquellas tierras en uso, pero el valor fundamental es el de cambio, puesto que esta capa social tiene la capacidad de “otorgar” valor residencial a espacios que no lo tienen. Sus tierras están racionalmente utilizadas con miras a obtener el mayor beneficio económico en las zonas comerciales, la industria y los servicios privados de los cuales es propietaria.

Esta capa ha definido la estructura de la ciudad de Caracas o la utilización del espacio urbano, ya que ha afectado la distribución geográfica de la población mediante las decisiones de localización de industrias y actividades en general. Ha afectado también la dinámica ocupacional urbana al determinar el patrón tecnológico de ocupación, es decir, su intensidad en términos de mano de obra. También, ha definido la morfología urbana a través de sus decisiones sobre la ubicación de actividades económicas dentro de la metrópoli.

La dinámica de desarrollo espacial de Caracas ha estado determinada por la capa hegemónica o clase de altos ingresos, que ha atraído los mejores servicios hacia las zonas sobre las cuales ha tenido intereses comerciales, residenciales o industriales. Los factores más valorados por este grupo para escoger su residencia fueron la accesibilidad o vialidad eficiente; la infraestructura básica o dotación eficiente de agua, cloacas y recolección de basura; la privacidad y exclusión de aquellas actividades que no fueran residenciales, incluyendo infraestructuras sociales tales como clínicas y escuelas; y las condiciones ambientales favorables en cuanto a clima, vegetación y paisaje. Algunos ejemplos de urbanizaciones de clase alta son, para comenzar al este del centro histórico, San Bernardino y La Florida desde su fundación hasta los setenta; seguidas por el Country Club y Campo Alegre, La Castellana y Altamira desde su fundación hasta nuestros días. Debe destacarse que todas las urbanizaciones se encuentran en una línea horizontal a lo largo de ejes viales o de avenidas centrales del valle —Rafael Urdaneta, Andrés Bello y Francisco de Miranda—, completadas desde los setenta con la avenida Boyacá por el norte; todas ellas les dan accesibilidad mientras conservan su privacidad. Este patrón alargado resulta muy costoso desde el punto de vista de la dotación de servicios y es el resultado, en última instancia, del poder de la clase alta para afectar las decisiones del Estado en materia de dotación de infraestructura urbana y de su poder para decidir la dinámica del desarrollo económico y urbano.

A partir de los años setenta y en la medida en que aumentó la densidad en las zonas de altos ingresos o que se produjo la invasión de usos comerciales o de oficinas, una parte de la clase alta residente de La Florida, San Bernardino, Altamira o Los Chorros se desplazó hacia nuevas urbanizaciones del sureste de Caracas (Colinas de San Román, Prados del Este, La Lagunita...) que reunían mejores condiciones ambientales y mayor privacidad. No obstante, un grupo de la clase alta permaneció en los enclaves originales, por ejemplo el Country Club, la Florida o Altamira. Más recientemente, la creciente inseguridad social llevó a algunas familias a ubicarse en edificios de baja densidad en urbanizaciones de lujo, como La Alameda, San Román y Colinas de Valle Arriba.

La capa intermedia

Originalmente, este grupo social se conformó de manera fundamental con la economía petrolera y se localizó en los espacios producidos por la capa hegemónica (Acosta, 1973). El comportamiento de los grupos medios fue tan heterogéneo como su composición socioeconómica:

- La población de mayores ingresos dentro la clase media se ubicó cerca de la clase alta para beneficiarse del estatus social que da dicha proximidad; también habitó en nuevas urbanizaciones de baja densidad, como Santa Inés, Cerro Verde y la parte alta de Cumbres de Curumo.
- La población de ingresos medios se localizó en edificios de propiedad horizontal de densidades variables y con relativa accesibilidad; por ejemplo en San Bernardino, Los Palos Grandes, Sebucán, Santa Fe, Caurimare y El Cafetal.

No obstante, en la mayor parte de los casos, las urbanizaciones de clase media también se beneficiaron de la cercanía a la clase alta. Su poder sobre el espacio residía en el número significativo de votos, en su desproporcionada representación en las cámaras de diputados y senadores del Congreso Nacional, y en su profesionalización y participación como cuerpos técnicos en los organismos de planificación del Estado. Como resultado, pudieron beneficiarse de bajas tasas de interés y subsidios para la vivienda y de la dotación gratuita, por parte del Estado, de muchos de los servicios de infraestructura.

La capa de ingresos bajos o la población de escasos recursos

Este grupo tuvo poca capacidad de decidir su localización y se ubicó mayormente en las áreas periféricas, en zonas inestables geológicamente y de escaso o nulo valor de cambio; un pequeño grupo se asentó en los intersticios de las urbanizaciones residenciales que ayudaron a construir, como los barrios Los Erasos y Anauco en San Bernardino, Chapellín

en La Florida, Bello Monte en Bello Monte, y El Pedregal entre La Castellana y el Country Club, entre otros ejemplos. Su localización, mayormente periférica y distante de los empleos en que desempeñan sus actividades económicas, difiere de sus prioridades, pues, de poder decidir, priorizarían la proximidad a los lugares de trabajo y la dotación de servicios básicos y sociales. Su impacto en la configuración espacial se ha dado mediante la apropiación de los espacios públicos a través de la invasión de zonas no urbanizables en terrenos inestables y en tierras que están fuera del mercado, así como mediante la producción pública de los espacios que habitan. A fines de los años noventa, cerca del 50% de la población caraqueña vivía en barrios marginales que se extendían desde el extremo este de Petare hasta el extremo oeste de Catia, tales como Los Cangilones, La Vega, Los Erasos, Hornos de Cal, Niño Jesús, Cementerio, Los Mangos, etc.

En los años cuarenta, la zona central de El Silencio fue saneada con un emblemático proyecto de vivienda multifamiliar dirigido por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, y a fines de los cincuenta —bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (1952-1958)— se impulsaron los programas de vivienda pública con la construcción masiva de superbloques como el 23 de Enero, Casalta y Simón Rodríguez. Durante los años sesenta, bajo el gobierno democrático de Raúl Leoni (1964-1969), se amplió la construcción de modernos superbloques y ciudades satélite de interés social, como Caricuao, con capacidad para albergar a más de 300 mil personas; finalmente, con la bonanza petrolera de los años setenta y bien entrada la crisis, se masificó la construcción de edificaciones de interés social en diversos sectores de la metrópoli, como La Vega, Caucagua y Caucagüita. También se iniciaron ambiciosos proyectos de renovación urbana en San José y La Pastora, que quedaron inconclusos por su inviabilidad económica y política, ya que fueron afectados por la crisis económica y, además, altamente cuestionados por los vecinos cuando se les pidió su opinión y participación. La crisis de los ochenta paralizó la construcción de superbloques por parte del Estado en Caracas; además, las áreas urbanizables dentro de la ciudad se habían agotado mucho antes, de forma que los últimos proyectos residenciales fueron

realizados en la periferia metropolitana o en las denominadas “ciudades satélite” de Guarenas y Guatire o en los Valles del Tuy. Estas ciudades satélite tuvieron como objetivo no solo la desconcentración demográfica de la ciudad capital, sino también la desconcentración de las actividades industriales.

A partir de los años setenta, la expansión lineal de los asentamientos residenciales de las clases media y alta en dirección este-oeste encontró un límite en los barrios pobres que habían sido invadidos en décadas anteriores, con lo que el patrón de crecimiento residencial de las clases media y alta se modificó en dirección sureste; allí se desarrollaron las urbanizaciones Santa Fe, Prados del Este, Cumbres de Curumo y Terrazas del Club Hípico, entre otras. Además, este proceso facilitó el acceso a las nuevas y distantes urbanizaciones de la clase media alta o alta, como El Placer y La Lagunita. La construcción de grandes avenidas y autopistas como la de Prados del Este junto a servicios necesarios por parte del Estado y por los privados, como el Centro Comercial Concreta, facilitaron este proceso.

Para los años ochenta y noventa, el eje noreste-noroeste que limita al norte con el Parque Nacional El Ávila se saturó poblacionalmente, aunque permaneció como el eje más diverso en términos de las clases sociales y de las actividades urbanas que alberga. Adicionalmente, el sureste de la capital siguió desarrollándose con nuevas urbanizaciones de clase media y alta, dadas las nuevas tecnologías que permitieron construir en fuertes pendientes; también se densificaron aquellos barrios en que se había asentado previamente la población de escasos recursos, como Terrazas del Club Hípico o Las Minas, del municipio Baruta.

Como resultado, a partir de los años ochenta se observan dos patrones de asentamiento urbano bien diferenciados y segregados en la ciudad de Caracas: el patrón formal de las urbanizaciones de las clases media y alta y el patrón de los asentamientos informales de la población de menores ingresos. Dada su visibilidad y la gran cantidad de personas que habitan en las precarias viviendas llamadas “ranchos” y la topografía de la metrópoli, los asentamientos informales han marcado fuertemente la configuración espacial caraqueña.

Si bien antes de los ochenta existían en Caracas procesos de segregación espacial producto de la existencia de clases sociales bien diferenciadas, las confrontaciones de clases entre los barrios donde habitan los pobres y las urbanizaciones de clase media y alta no se expresarían en la dinámica urbana de forma visible hasta fines de esa década. En febrero de 1989, las protestas políticas en la capital contra las medidas de ajuste estructural adoptadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez debido a la aguda crisis económica existente originaron una explosión social de grandes dimensiones denominada “Caracazo” o “el día que los cerros bajaron a Caracas”, porque la mayoría de tales protestas desorganizadas fueron promovidas por los sectores populares (García-Guadilla, 1991a; López Maya, 2005). En el mediano y largo plazo, el Caracazo tuvo profundos impactos espaciales y sociales en la capital: por un lado, la movilización de los grupos sociales medios altos, que, por disponer de recursos económicos, podían decidir su relocalización hacia espacios más homogéneos y afines socialmente, produjo mayor segregación social, fundamentalmente entre las clases medias y los sectores populares, y, por lo tanto, mayor homogeneización del espacio de las urbanizaciones y barrios. Además, el Caracazo marcó el inicio del miedo al “otro”, cuyo imaginario referente para las clases medias y altas era el sector con menores recursos económicos: “el pobre” o, como las llamaron los medios de comunicación, las “turbas desorganizadas” que en esa oportunidad “bajaron los cerros” donde habitaban para satisfacer su hambre de comida y de los artículos de consumo suntuario que les estaban negados, y para atemorizar con esta conducta a la clase media, germen de la polarización y del “miedo al otro”.

Organizaciones sociourbanas y movimientos por la ciudadanía

Tomando como referencia la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y la instauración de la democracia en 1958, podemos distinguir dos etapas: el período 1930-1958 y el de 1958-1989. Los años 1930-1958 estuvieron signados por la lenta constitución de partidos políticos como las

formas de expresión y oposición a los regímenes políticos autoritarios, de carácter personalista; ello dificultó la constitución de movimientos fuertes y estables desde la sociedad civil. A partir de la década de 1930, en Venezuela se dieron movilizaciones de los estudiantes universitarios que tuvieron gran influencia en la formación de partidos políticos; en los años cincuenta, las movilizaciones de población, junto a los partidos, enfrentaron al régimen dictatorial de Pérez Jiménez. También se dieron movilizaciones durante los cuarenta que reivindicaron derechos de ciudadanía políticos, tales como derecho al voto por parte de las mujeres. Estas movilizaciones se localizaron fundamentalmente en Caracas, aunque en este período no se observan demandas significativas por reivindicaciones urbanas tales como la dotación o calidad de los servicios.

La instauración democrática en 1958 rompió las restricciones a la migración rural-urbana, acentuó el proceso de urbanización y consolidó una economía moderna en vías de industrialización, cuyo soporte físico principal fue Caracas; con ello se abrieron las posibilidades para el surgimiento de la sociedad civil y, por ende, de un movimiento ciudadano. Sin embargo, la Constitución de 1961 puso límites a tal posibilidad, ya que centralizó la defensa del incipiente sistema democrático en los partidos cuyo poder político se fortaleció progresivamente como consecuencia del clientelismo prevaleciente, así como del sistema electoral que privilegió el voto por "un partido" y no por individualidades. Además, los partidos se comprometieron mediante pactos como el de Puntofijo a evitar conflictos y a buscar vías de consenso basadas en la concertación y consulta (López Maya y Gómez Calcaño, 1989). A través de estos pactos, en los que participaron las agrupaciones políticas más importantes, la Iglesia tradicional, los sindicatos y los empresarios, el clientelismo permeó prácticamente todas las organizaciones sociales, gremiales o reivindicativas. No obstante, la falta de control, por parte del Estado, de las invasiones urbanas o del patrón de urbanización "espontáneo" de Caracas fue el germen de un movimiento ciudadano diferenciado según la clase social.

En los barrios pobres de Caracas, a raíz de la caída de la dictadura en 1958, se constituyeron juntas de barrio para distribuir el bono de desempleo temporal decretado por la Junta Transicional dirigida por

Wolfgang Larrazábal. Estas juntas de desarrollo o de mejoramiento de los barrios populares fueron cooptadas desde sus inicios por los partidos políticos a través de las prácticas clientelares, paternalistas y populistas. Al amparo de la Ley Orgánica del Régimen Municipal (LORM) de 1971, durante la década de los setenta se constituyeron asociaciones de vecinos en muchas de las urbanizaciones de clase media y alta de Caracas, con el fin de enfrentar las violaciones por parte de los constructores y del propio gobierno a las ordenanzas de zonificación vigentes y, en general, para defender “la calidad de vida” (Geigel Lope-Bello, 1979), pues esta ley fue muy limitada en lo que se refiere a la participación más allá de la consulta en algunos aspectos. Sin embargo, estas asociaciones, agrupadas en la Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas (Facur), tuvieron gran influencia en la constitución de un movimiento ciudadano autónomo tanto del Estado como de los partidos políticos. Este movimiento ciudadano se propuso como objetivo la descentralización política y la apertura del espacio local a la participación mediante la transformación de la LORM de 1971 (García-Guadilla, 1997), la cual se fundamentaba en la Constitución de 1961, que priorizó “la estabilidad política sobre la participación ciudadana”. Tales objetivos fueron logrados mediante el proceso y las leyes de descentralización política de 1989, que legitimaron la participación ciudadana.

Durante la década de los ochenta se complejizaron, consolidaron y articularon las diversas expresiones de la sociedad civil y los movimientos sociales, entre los que destacaron el movimiento cooperativo, las organizaciones populares lideradas por el Centro de Formación al Servicio de la Acción Popular (Cesap), el movimiento ambientalista y las asociaciones de vecinos, los cuales se agruparon y articularon en demanda de una mayor democratización del sistema político, es decir, de una democracia participativa. Los distintos movimientos, asociaciones y organizaciones se agruparon a través de coordinadoras y federaciones vecinales, ambientales y cooperativas para la recolección de firmas de cara a modificar la restrictiva LORM de 1971 y defender el ambiente; allí se destacaron Facur y la Federación de Juntas de Ambiente, cada una de las cuales agrupó a más de cien organizaciones (García-Guadilla, 1991a).

Crisis del modelo rentista petrolero (1989-1999)

Impactos de la crisis en los actores y en el espacio sociourbano

Si bien en Venezuela la crisis del modelo rentista petrolero comenzó en los años setenta, esta se institucionalizó en 1989 con el derrumbe de los precios del petróleo que llevaron al debilitamiento del “Estado de bienestar” y a la adopción de fuertes medidas de ajuste estructural, los cuales aumentaron los niveles de conflictividad social y, por ende, de ingobernabilidad política. El agotamiento del modelo rentista petrolero generó altos costos sociales y políticos y tuvo un elevado impacto en los actores sociales y en el espacio urbano de la ciudad capital. Como consecuencia de la grave recesión en la que entró el modelo rentista petrolero, que había sido el sustento de la democracia de corte populista y clientelar, el sistema político se debilitó y el precario consenso y los pactos políticos que existían entre los actores sociopolíticos que participaban del mismo sufrieron un deterioro progresivo, perdieron credibilidad, como en el caso de los partidos políticos tradicionales, y entraron también en crisis.

Por otro lado, la mayoría de los actores sociales que fueron excluidos de las redes clientelares y de los subsidios del Estado petrolero, independientemente de su clase social, comenzaron a cuestionar al modelo político-económico por la eliminación de los subsidios, en unos casos; en otros, por el aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza, que llegó a niveles por encima del 40% de la población total, de acuerdo con cifras oficiales del entonces Ministerio de la Familia. Dicho cuestionamiento trajo como consecuencia estallidos sociales y la movilización de los distintos actores sociales en contra del “paquete económico”, los cuales, como en el caso del “Caracazo” ocurrido el 27 y 28 de febrero de 1989, fueron reprimidos sistemáticamente por el Estado; ello con el fin de garantizar la gobernabilidad y la estabilidad, base de los acuerdos o pactos entre los distintos actores que dieron origen a la Constitución de 1961 vigente para el momento, en la que se priorizó la estabilidad política sobre la participación ciudadana.

La escasez de instituciones e instancias sociales organizativas de mediación y las deficiencias del sistema de democracia representativa para orientar demandas e intereses grupales reforzaron las tensiones y los conflictos³. El escenario social y político se transformó debido a la fragmentación y reestructuración de los viejos actores sociales y políticos y a la emergencia de nuevos actores.

El segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que se inauguró en 1989, insistió en presentar a la crisis como un problema exclusivamente económico. Sin embargo, el acceso a los servicios gratuitos de educación y salud —que dentro del sistema rentista petrolero y del capitalismo de Estado prevalecientes en Venezuela eran los pilares del sistema de movilidad social ascendente y constituían el fundamento de los procesos de modernización-industrialización— se restringió significativamente y su calidad sufrió un grave deterioro: afectó a los más pobres y movilizó a la población urbana, sobre todo a la de Caracas.

La ciudad capital fue el asiento de las movilizaciones y protestas más frecuentes e intensas contra “la falta de agua”, “el aumento del precio del transporte”, “el creciente costo de la vida”, etc. Como resultado de las limitaciones a la participación que existían en la Constitución de 1961 y del elevado costo social y político de las sorpresivas medidas de ajuste estructural, las organizaciones ciudadanas reestructuraron sus luchas alrededor de la “profundización de la democracia”, considerada como un prerequisite para obtener sus demandas de ciudadanía, como la mayor participación en la gestión de las políticas públicas (Santana, 1993; García-Guadilla, 1991b).

En lo que respecta a la configuración socioespacial de Caracas, el agotamiento del modelo rentista petrolero y la adopción de medidas de ajuste macroeconómico también tuvieron profundos impactos en la estructura funcional metropolitana como consecuencia de los siguientes factores: la mayor competencia anárquica de los agentes urbanos (urbanizadores, capital inmobiliario, propietarios de tierras); una estructura

3 De hecho, el Caracazo respondió a la falta de instituciones o “válvulas de escape” para drenar las tensiones generadas por las medidas macroeconómicas de ajuste estructural que tomó el gobierno y que empobrecían aún más a la población.

de mercado que promovió densidades espaciales elevadas para producir rentabilidad inmediata en la dotación de los servicios; una baja participación de la población pobre y de las clases media y alta en la dinámica del consumo urbano, sobre todo de la vivienda formal; y el mayor deterioro ambiental, debido al empeoramiento de la calidad de vida por el colapso de los servicios básicos y sociales.

Otros efectos de la crisis económica sobre la configuración socioespacial fueron los siguientes (García-Guadilla, 1994):

- *La creciente homogeneización socioespacial.* Los estallidos sociales del Caracazo y el miedo a revueltas ulteriores iniciaron un proceso de homogeneización social (García Sánchez, 2004) en aquellas urbanizaciones de clase media y media alta en las que también existían barrios pobres, como fue el caso de San Bernardino, Prado Humbolt o Colinas del Club Hípico, que históricamente se caracterizaron por su heterogeneidad social. Los grupos o clases sociales con capacidad para decidir la localización, como la clase media alta, tendieron a movilizarse hacia urbanizaciones de clase media y alta del sureste de Caracas, que eran más homogéneas socialmente.
- *El aumento de la segregación socioespacial.* La intervención del mercado inmobiliario, con el objetivo de maximizar sus ganancias en espacios ocupados por los niveles de ingreso bajo —que habían adquirido un alto valor de cambio junto con las acciones de planificación, remodelación y rehabilitación llevadas a cabo por el Estado—, acentuó la segregación socioespacial.
- *Mayor conflictividad social.* A medida que la crisis económica se hizo más aguda y los recursos y servicios urbanos más escasos y competitivos, se generó mayor conflictividad social entre los distintos grupos sociales.
- *La privatización de los cuerpos de seguridad.* El desmantelamiento de la precaria infraestructura de los cuerpos de seguridad del Estado, junto con el aumento de la inseguridad social resultante de la crisis

económica, llevó a los residentes de las urbanizaciones de clase media y alta a privatizar los aparatos de seguridad y a asumir sus costos. La privatización o el cierre de calles mediante vallas y vigilantes privados —que impiden la entrada a todas aquellas personas que no se identifiquen apropiadamente— redujeron sustancialmente el espacio o ambiente urbano para el disfrute de los ciudadanos, y lesionaron un derecho constitucional. Al disminuir la infraestructura local de vías alternas disponibles, se incrementó la circulación y el tráfico en las vías principales; también se redujo el patrimonio ecológico y estético, es decir, la calidad de vida de los ciudadanos, por cuanto fueron las urbanizaciones mejor dotadas ambientalmente las que se privatizaron primero.

La inseguridad social tuvo efectos negativos en las relaciones sociales vecinales o comunitarias debido al aumento en los niveles de desconfianza entre los habitantes locales, lo que disminuyó el uso de los espacios públicos para desarrollar vínculos de vecindad, tales como el frente de las viviendas, el porche, la calle o la plaza, y dejó sin soporte físico tales relaciones.

Algunas de las medidas de seguridad tomadas por los habitantes de las urbanizaciones de clase media y alta, e incluso por los barrios pobres en los ochenta y noventa, tuvieron un fuerte impacto en el paisaje urbano, por las puertas blindadas, vallas, cercas, rejas y alambales, que simulaban cada vez más una cárcel. En las urbanizaciones de clase media alta y alta, la privatización, que dificultó el acceso a estos espacios públicos, atentaba contra el derecho que tienen todos los ciudadanos de disfrutar de la prolija naturaleza caraqueña, característica de las urbanizaciones de baja densidad en las que habitaban las clases media alta y alta capitalina.

- *La mercantilización de los espacios públicos.* La crisis económica agudizó las condiciones de supervivencia de la población más pobre, mientras el creciente desempleo y el aumento el costo de vida estimularon el sector informal de la economía, caracterizado por la seudoterciarización, que se expresó en Caracas en el alto porcentaje

de vendedores ambulantes o “buhoneros”. Si bien algunos planificadores interpretaron el fenómeno del comercio informal —típico de la urbanización de las metrópolis latinoamericanas en los años sesenta, setenta y ochenta— como la “recuperación” de la calle por parte de la población y lo consideraron como un signo de vitalidad de las ciudades, deben destacarse las dificultades que sufre el peatón para desplazarse por los lugares públicos cuando las aceras están prácticamente tomadas por los vendedores ambulantes, situación que, además, tiende a elevar los niveles de inseguridad.

Al igual que la calle, se mercantizaron los parques públicos en una ciudad que, como es el caso de Caracas, está altamente congestionada y tiene una de las relaciones área recreativa—número de habitantes menos equilibradas del mundo. El aumento de las tarifas de acceso a esos espacios —política que persiguió el autofinanciamiento frente a la crisis— perjudicó mayormente a la población de escasos recursos, que vivía hacinada en los barrios pobres. Esta mercantilización en ocasiones implicó la exclusión de la población pobre de estas áreas de recreación y su reapropiación por los grupos de ingresos medianos para actividades deportivas tales como maratones, caminar, correr, etc.

Los grupos de escasos recursos también se reapropiaron de algunos espacios abiertos que se hicieron accesibles a través de la apertura del sistema de metro en Caracas, en enero de 1983; con su llegada, algunos espacios recreativos fueron abandonados por las capas medias por considerarlos “inseguros”, lo que produjo un aumento de la segregación socioespacial. Tal fue el caso de algunos paseos y centros de actividades comerciales y recreativas al aire libre, como el bulevar de Sabana Grande, que fue uno de los lugares de recreación favoritos de la clase media caraqueña en los años cincuenta, sesenta y setenta. Sin embargo, con la apertura del metro, que facilitó mayor accesibilidad a la población de escasos recursos, la clase media se desplazó hacia los modernos centros comerciales que para la época estaban alejados de las líneas de transporte masivo.

No obstante, no todos los espacios urbanos fueron abandonados por un grupo social y recuperados por otro. El crecimiento metropolitano llevó a los caraqueños de esa época a desplazarse menos a pie y más en vehículo —en el caso de los grupos medios y altos— o en transporte público —en el caso de las personas de ingresos bajos—. Por otro lado, la inseguridad contribuyó al cambio de los patrones de recreación e hizo que las calles, las plazas, los bulevares al aire libre y, en general, los espacios públicos abiertos se utilizaran menos, a pesar de que Caracas ha sido catalogada como “la ciudad de la eterna primavera”. Estos sitios fueron sustituidos por lugares recreacionales cerrados, tipo centro comercial, en los que la gente se siente más segura. Al caer la noche, muchas de las calles y los espacios abiertos, otrora dinámicos, se transformaron en espacios de nadie, sin custodia policial, y sobre todo “sin los ojos” de los ciudadanos que vigilen.

La segregación espacial resultante de la crisis puede interpretarse como un proceso de desdemocratización de la ciudad capital, puesto que la “privatización y mercantilización de la ciudad”, junto con las medidas de exclusión adoptadas por los propios ciudadanos para garantizar la seguridad personal —que, en última instancia, es una de las funciones fundamentales que debe cumplir el Estado—, tienden a debilitar la democracia, al restringir el acceso de algunos grupos sociales a los espacios públicos de mayor calidad ambiental cuando estos son privatizados.

*Las organizaciones sociourbanas frente a la crisis:
Cooptación y desmovilización*

Dada la inestabilidad política reinante después del Caracazo, debido al cuestionamiento no solo del gobierno vigente sino también de la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, el presidente Pérez dio curso a leyes descentralizadoras que eran ampliamente demandadas por las asociaciones ciudadanas, pero que se encontraban trabadas en el Congreso Nacional. De esa forma, a fines de 1989 se sancionó una reforma

a la LORM y, a comienzos de 1990, se creó el primer Reglamento de Participación Ciudadana (RPC) de esta ley, el cual otorgó mayor poder político a las asociaciones de vecinos en la gestión urbana local.

Los efectos en el ámbito local de la nueva LORM, junto con otras leyes descentralizadoras –tales como la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias y la Ley Orgánica del Sistema Electoral, también aprobadas en 1989–, fueron la constitución de municipios autónomos; la mayor participación de los ciudadanos en la elección de autoridades del ámbito local-municipal, debido a la institucionalización de la figura del alcalde y su elección directa y uninominal; y la elección uninominal de gran parte de los concejales, así como también la elección de las juntas parroquiales por planchas.

Sin embargo, con la aprobación de la LORM y su respectivo reglamento de participación, se acentuaron los intentos de cooptación por parte de los partidos políticos, sobre todo de las organizaciones populares, lo que fraccionó el movimiento ciudadano de base vecinal. A ello contribuyó la crisis económica y política de la década 1989-1999, que se asoció con altos niveles de ingobernabilidad, dada la incapacidad del Estado para institucionalizar los conflictos y canalizar los intereses de la sociedad civil. Debido a su baja credibilidad, partidos políticos tales como Acción Democrática y Copei –que previamente habían creado los burós vecinales y las secretarías de participación vecinal para buscar adeptos– penetraron las organizaciones ciudadanas e intentaron cooptarlas, con éxito en el caso de las organizaciones populares.

Si bien tal cooptación pareció debilitarse por la falta de legitimidad que sufrieron los partidos políticos como consecuencia de las movilizaciones sociales que se generaron en su contra después del Caracazo, en los años noventa, cerca del 70% de las asociaciones de vecinos habían sucumbido a los partidos políticos o a prácticas no democráticas de presidencialismo y proyección personal (véase Santana, 1993). Como resultado, las “agendas” de estas asociaciones, que sobre todo en las ciudades grandes como Caracas eran bastante activas, se paralizaron y las asociaciones de vecinos tendieron a desmovilizarse.

Sin embargo, los partidos políticos no mostraron el mismo interés en cooptar los movimientos sociales cooperativista, popular, de mujeres y ambientalista, quizás porque estos no tenían el poder político que se les asignó a los vecinos a través de la LORM de 1989. Como consecuencia, estas organizaciones pudieron desarrollarse de manera más autónoma y constituyeron en los años noventa la plataforma de apoyo al movimiento ciudadano que se mantuvo alejado de los partidos políticos.

Socialismo petrolero del siglo XXI (1999-2010)

Territorialidad política y geografía de guerra: Polarización y feudos urbanos

El modelo económico basado en la renta petrolera continúa vigente en los albores del siglo XXI. No obstante, una vez electo el presidente Hugo Chávez, la democracia representativa y liberal de la Constitución de 1961, que orientó las políticas públicas de los años setenta, ochenta y noventa, se transformó en un modelo de “democracia participativa y protagónica” que se plasmó en la Constitución Bolivariana de 1999. En esta última se enfatizaron los conceptos de inclusión y de ciudadanía, y se abrió la posibilidad de que los distintos actores urbanos participaran activamente o fueran “protagonistas” en la producción de la ciudad y en la gestión de las políticas públicas.

Después del golpe de Estado de la oposición política contra el presidente Chávez en el año 2002, y a pesar del fallido intento de este por reformar la Constitución vía referéndum en el año 2007, el discurso y las acciones estatales se orientaron explícitamente contra el capitalismo, en un intento por imponer el denominado “socialismo del siglo XXI”. Por otro lado, el sesgado discurso presidencial (Lozada, 2008), junto con los intentos por desmontar el modelo capitalista liberal para avanzar hacia el nuevo modelo geopolítico y organizativo, agudizó la grave crisis de gobernabilidad política que se venía gestando desde la década de los noventa; ello hizo que la polarización social y política latente que había emergido momentáneamente con los sucesos del Caracazo aflorara al iniciarse la década del 2000.

La Constitución de 1999 ha tenido un fuerte impacto en la configuración socioespacial y en la dinámica urbana caraqueña. Por un lado, no resolvió política, jurídica ni económicamente el tema de cómo articular el estatus de capital que tiene Caracas y su rol como metrópoli principal con los cinco municipios autónomos que la conforman, por lo que los conflictos entre el nivel central y el local se han agudizado y han adquirido un tinte político. Tales conflictos tienen un fuerte impacto en la gestión de las políticas urbanas, pues el marco jurídico para el ordenamiento urbano de Caracas tiene algunos rasgos que dificultan continuar con los avances de descentralización logrados en la década de los noventa, lo que vulnera en algunos casos el principio de democracia participativa presente en la Constitución de 1999. Por ejemplo, se han generado conflictos políticos y por recursos, además del solapamiento de competencias entre los distintos niveles de gobierno de la capital, como es el caso del jefe de gobierno del Distrito Capital, que fue nombrado por el presidente Chávez en vez de ser elegido en las urnas o mediante referéndum, como sí lo fueron el alcalde metropolitano y los cinco alcaldes de los municipios (Álvarez Itriago, 2010).

Los conflictos y las confrontaciones urbanas de la década del 2000 también respondieron a los intentos de implantación del modelo de socialismo del siglo XXI; de hecho, las movilizaciones y protestas urbanas se dieron en dos direcciones: unas contra las políticas y los intentos de socialización de la propiedad privada por parte del grupo opositor al modelo, y otras a favor de las políticas del presidente Chávez. Como consecuencia de esta dinámica, la primera década del siglo XXI muestra a Caracas como una ciudad en efervescencia, cuya ciudadanía se encuentra dividida en dos grupos antagónicos, ambos movilizados políticamente, y en la que cada uno se expresa en la ciudad en diferentes “nichos” o espacios. Sin embargo, con frecuencia, ambos reivindican o intentan apropiarse de los espacios públicos simbólicos, como la plaza Bolívar de Caracas o la sede de la estatal petrolera PDVSA en la urbanización La Campiña, que fueron tomadas durante los graves conflictos políticos de 2002-2004 por los adeptos al presidente Chávez.

La oposición política, por su parte, instaló su centro de movilizaciones en la plaza Altamira y alrededores y en la sede de la estatal petrolera PDVSA en la urbanización Chuao.

En mayor grado que en otras ciudades, en Caracas la protesta política y la lucha por la democracia se expresaron, de 2002 a 2005, en los espacios públicos y privados más que en las urnas o a través de la vía electoral. Por otro lado, en la medida en que la pobreza y los niveles de desigualdad se acentuaron, las diferencias de clase que existían se transformaron en diferencias políticas; tal como se ha señalado, después de la violenta explosión social del Caracazo, los conflictos sociourbanos capitalinos se impregnaron con contenidos de clase y derivaron en una lucha de clases en la que estas se enfrentaron de forma polarizada. Estas diferencias de clase, que pueden equipararse con divergencias político-ideológicas, trascendieron el ámbito de lo social y político al expresarse territorialmente en la calle, las plazas, los parques o frente a edificios públicos con valor simbólico. El espacio público caraqueño se convirtió al mismo tiempo en un espacio de encuentro entre ciudadanos afines en términos sociales e ideológicos y de guerra, desencuentro y lucha urbana entre desiguales.

En Caracas, en la década 2000-2010, las diferencias políticas y sociales, el miedo, el desánimo y la frustración política estimularon la exclusión en los espacios públicos capitalinos, además de crear fuertes procesos de segregación espacial y de polarización social. Como resultado de la polarización sociopolítica, se desarrolló lo que el sociólogo Tulio Hernández denominó como una “gramática de guerra”⁴, caracterizada por el secuestro de los lugares públicos de la ciudad capital por un grupo político, ya sea del gobierno o de la oposición, lo que generó espacios de exclusión no democráticos.

La polarización sociopolítica característica de la primera década del siglo XXI se ha dado con mayor fuerza en Caracas porque tiene más diversidad de clases sociales y mayores diferencias político-ideológicas. Esto llevó a los ciudadanos, independientemente de su ideología, a la apropiación y la delimitación –simbólica o real– del espacio público y a

su tratamiento como “feudos/guetos”, ya que los espacios de “los unos, los amigos” no podían ser traspasados por “los otros, el enemigo” sin que se diera una confrontación entre ambos (García-Guadilla, 2006). Como consecuencia, surgieron en la ciudad capital formas de lucha urbana violentas y prácticas antidemocráticas, de intolerancia y excluyentes, tales como la toma violenta de calles y avenidas o las “guarimbas” (García Dangles, 2004; López Maya, 2005), las cuales sirvieron de justificación a las acciones de exclusión espacial y social del “otro”, a pesar de que pretendían defender los derechos de ciudadanía que ampara la Constitución.

En Caracas, las luchas por la denominada “democracia participativa” se han “especializado”, expresándose de forma dinámica tanto en los ámbitos privados de la residencia u hogar familiar como en los ámbitos públicos de la calle, plaza o autopista de las ciudades. Las consecuencias han sido la creación de feudos y guetos urbanos en la ciudad que responden a las diferencias sociales y políticas; la territorialización de los conflictos políticos; la aparición de espacios altamente segregados; la pérdida de libertad para desplazarse en la metrópoli, dado el alto riesgo de ser identificado con el “otro”; el creciente deterioro de los servicios y de la calidad de vida de los ciudadanos; y el surgimiento de los espacios del miedo y de la violencia. En síntesis, se perdió el derecho a la ciudad: hoy hay exclusión, desdemocratización y desciudadanización.

El territorio de Caracas no es uno sino múltiple; podría hablarse de territorios políticos —el chavista por un lado y el de la oposición por el otro— en los cuales la tarea de identificar la localización de las actividades urbanas es de índole no solo geográfica sino también clasista. El territorio chavista es el de las barriadas pobres localizadas en las cuatro márgenes cardinales de la ciudad y, como lo apuntaba el periodista Taynem Hernández⁵, es el espacio donde los índices de violencia urbana son mayores, dada la falta de vigilancia y control policial. Su ubicación marginal se vuelve estratégica a la hora de los conflictos, porque en este territorio se pueden cerrar (aislar) las murallas y puertas de acceso a la

5 *El Universal*, Caracas, diciembre 22 de 2002, p.1-7.

ciudad y a sus actividades, tal como ocurría con las murallas de la Edad Media. En contraposición, el territorio de la oposición es fundamentalmente el de las urbanizaciones de clase media ya mencionadas.

Entre el 2002 y el 2006, la geografía de los conflictos muestra que el espacio o territorio chavista cubría el centro de la ciudad, muy cerca del palacio de Miraflores, donde se ubican el puente Llaguno, la “Esquina Caliente” y la plaza Bolívar, espacios que sirven de sede casi permanente a los defensores más radicales del presidente. También, cubría temporalmente la avenida Bolívar, cuando allí se instalaba el Mercado Popular Chavista; el paseo Los Próceres y la plaza O’Leary, cuando en estos se realizaban actos de masas políticos o recreativos como el “Gaitazo”; la plaza Venezuela, que representa el límite simbólico entre el este y el oeste y es utilizada frecuentemente por el alcalde del municipio Libertador para realizar mítines y actividades festivas vinculadas con dicha alcaldía; y la calle frente al edificio sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la urbanización La Campiña, que, si bien fue por un tiempo un espacio de competencia entre el chavismo y la oposición, finalmente fue cerrada y apropiada por el primero.

En contraste, el espacio o el territorio de la oposición incluía a la plaza Altamira o plaza Francia, convertida en símbolo al ser declarada por los militares antichavistas en el 2002 como plaza de la Libertad y territorio libre; y la plaza de PDVSA en Chuao, rebautizada como plaza de la Meritocracia, en honor a la huelga del personal profesional y técnico realizada un poco antes del 11 de abril del 2002. De forma temporal o menos permanente, según el conflicto, son territorios de la oposición la autopista del Este a la altura del distribuidor Santa Fe y la Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Altamira; las calles de urbanizaciones de clase media tales como La Florida, El Paraíso, Cumbres de Curumo; y algunas plazas y avenidas como la plaza Candelaria y la avenida Victoria, escenarios de fuertes cacerolazos, “trancazos” y otros eventos, por ubicarse en la frontera entre los dos territorios. La mayor parte del territorio chavista se encuentra en el municipio Libertador (oeste de la ciudad de Caracas) y en el municipio Sucre (al este); el territorio de la oposición abarca los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, todos ellos en el este

de la ciudad. En estos tres municipios viven los grupos con mayores ingresos socioeconómicos; no obstante, su tamaño poblacional es al menos diez veces menor que el del municipio Libertador

El recorrido por los territorios chavistas y de la oposición, que incluye barriadas pobres, afluentes urbanizaciones de clase media y espacios públicos que ambos comparten; la observación crítica sobre la clase social de los peatones que se desplazan por las calles, plazas y avenidas de Caracas; y, finalmente, el análisis de las características físicas del espacio y la naturaleza de las actividades que en estos espacios se realizan muestra una ciudad sitiada, con rejas, alambrado eléctrico, casillas de vigilancia y hasta barricadas en casas, edificaciones, calles y urbanizaciones para salvaguardar la propiedad privada de la clase media y alta. Es una metrópoli en la que los ciudadanos no se identifican ni se apropian de los espacios públicos que están deteriorados y son inseguros; en la que muchos espacios públicos han sido privatizados, lo que reduce la ciudad del ciudadano; en la que las calles y los espacios de circulación peatonal han sido apropiados por los comerciantes informales, no para cuidarlos sino para transformarlos al uso económico. En suma, se muestra una ciudad en la que los procesos de segregación socioespacial se han exacerbado como consecuencia de la creciente polarización social y en la que los conflictos políticos se han territorializado (García-Guadilla, 1998 y 2006; García Sánchez y Villá, 2001).

Caracas, ciudad que en el pasado se asumía como un ejemplo de “la convivencia de los barrios marginales con las modernas urbanizaciones de clase media” y de “una sociedad de clases sin lucha de clases”, es hoy una ciudad sitiada, dividida y orientada en dos direcciones contrapuestas socialmente y altamente segregada desde el punto de vista espacial y de desempeño de las actividades. Los espacios de convivencia social se han homogeneizado de forma contraria y segregada, y se han dividido en “espacios de los pobres y espacios de la clase media”. Esta separación tiende a coincidir con los espacios de quienes apoyan al presidente Chávez y los de sus adversarios, por lo que en Caracas se han reproducido las “áreas naturales” de la Chicago de 1920, entendidas estas como áreas territoriales homogéneas en términos socioeconómicos.

En contraste con aquella Chicago, el desencadenante de los conflictos espaciales en la Caracas de la década del 2000 es fundamentalmente de carácter político; es decir, el apoyo o el rechazo al presidente Chávez. A pesar de las diferencias políticas y sociales, los chavistas y la oposición coinciden en la forma de plasmar estas diferencias de forma segregada en el territorio que ocupan y, sobre todo, en “excluir al otro” de dicho territorio. Es así como Caracas ha pasado a ser una ciudad en la que se dan fuertes confrontaciones de clase asociadas al espacio que se ocupa: si se es pobre, se tiende a ser chavista y a vivir en el oeste, mientras que, si se tiene algo que perder (clases media y alta), se opta por la oposición política, que se ubica preferentemente (aun cuando no exclusivamente) en el este de la ciudad capital.

Las organizaciones ciudadanas de clase media y de los sectores populares que en el pasado hegemonizaron la lucha por la democracia participativa, al sentirse amenazadas por el enemigo —el “otro”— han priorizado sus intereses de clase en las respuestas dadas a la crisis política y urbana, por lo que han tendido a utilizar estrategias cuasi militares para defender los espacios privados del hogar o residencia familiar, el edificio o condominio y la urbanización en que habitan; en sus palabras, se trata de “defender la familia, la propiedad y la democracia”. En ocasiones, lo hicieron mediante planes y estrategias violentas, excluyentes y antidemocráticas; para ello, se apoyaron en organizaciones preexistentes, como el condominio de vecinos a nivel de edificación o las asociaciones de vecinos a nivel de la urbanización, ambas figuras sancionadas en el Reglamento de Participación Ciudadana de la LORM de 1989.

Las trasgresiones a los espacios del otro pueden ocasionar no solo heridos por golpiza o piedras, sino también muertos. Por ejemplo, el 11 de abril del 2002, fecha en que la oposición decidió llevar su protesta al palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo, ubicado en el centro de la ciudad y en territorio chavista, hubo numerosos muertos. También hubo dos adeptos al chavismo muertos con motivo de los intentos de la marcha de la oposición por llegar al emblemático paseo de los Próceres el día 6 de enero del 2003. Un policía metropolitano murió el 23 de febrero del 2003 por traspasar la frontera de adeptos al chavismo instala-

dos frente al edificio de la sede de PDVSA en la urbanización La Campiña. Esta violencia contra el otro se intensifica en los espacios que han sido apropiados según las diferencias políticas (adeptos a Chávez versus oposición) frente al “desdibujado e incrementalista proyecto bolivariano” que cada día, según sea la coyuntura política, parece delinearse de una manera distinta.

Sin embargo, dentro de este territorio urbano polarizado por la violencia política, el espacio “propio” tampoco garantiza la seguridad o integridad física, como lo demuestran las muertes en la plaza Altamira ocurridas el 6 de diciembre del 2002. Por otro lado, la expresión de esta violencia en espacios segregados políticamente tiene una vinculación estrecha con la diferencias socioeconómicas, por lo que la ciudad de Caracas ha tendido a polarizarse socialmente a la manera de un gueto, enfrentando, desde el punto de vista político y social, a la clase media y alta —que vive predominantemente en el sector este de la ciudad— con la población pobre —que tiende a vivir en el oeste—⁶. Esta relativa coincidencia entre las diferencias políticas y sociales estimula los estereotipos y marca cada vez en mayor grado el espacio urbano y las percepciones que cada uno tiene del otro; se delimitan de este modo los ámbitos de la ciudad en que se puede circular con relativa seguridad.

El recorrido de la cotidianidad metropolitana que se sugiere realizar mostrará asimismo la faceta antidemocrática de los procesos socioespaciales y políticos que están emergiendo en Caracas, y que se expresan en espacios del miedo y en ciudadanías de guerra que alientan procesos de descuidadización. Si se toma en cuenta que dichos procesos se vinculan con los distintos imaginarios sociales —los cuales, tal como se señaló, tienden a estar asociados con una posición de clase social—, el recorrido mostrará la cara de una ciudad dividida en geografías sociales estrechamente asociadas con la defensa de los estilos de vida de cada clase social. Para evitar la violencia urbana, es preciso conocer este mapa

6 Ni la segregación espacial ni la polarización social es total, ya que también existen pobres en el este, como en el caso de la parroquia Petare en el municipio Sucre, y urbanizaciones clase media media, como El Paraíso y Montalbán, las cuales se encuentran ubicadas en el oeste.

ideológico-social y político, de manera de no traspasar sus límites o fronteras.

Como consecuencia de la espacialización caraqueña de las expresiones políticas a favor o en contra del presidente Chávez, la función de la calle, la plaza y la autopista se ha transformado, e incluso la identidad de muchos de estos espacios ha cambiado de forma permanente. Acciones como el cerramiento de las calles y autopistas, denominado “trancazo”, o las frecuentes y masivas concentraciones y marchas, que impiden también la circulación vehicular, se han vuelto cada vez más frecuentes. De este modo, la calle ya no sirve solamente para la convivencia ciudadana y para que circulen los peatones en su ruta hacia las actividades cotidianas, pues está ocupada en días laborales por los comerciantes ambulantes o buhoneros que han crecido prodigiosamente a la luz de la crisis económica, o por las personas que se movilizan para “manifestar o marchar”. La autopista ya no sirve solo para que circulen los vehículos, sino que puede estar cerrada por la multitud de gente que acude a marchar a favor o en contra del régimen, por los “trancazos” de la vía hechos por la oposición, por los mercados populares o por las expresiones recreativas e incluso religiosas que se instalan en las ocasiones especiales decididas por el gobierno o la oposición.

Otra de las expresiones antidemocráticas de la territorialización de los conflictos la constituyen las movilizaciones cívicas o marchas dentro de espacios que excluyen al “otro”. La existencia de estos espacios políticos o de conflicto aumenta la probabilidad de que en ellos se ejerza la violencia en caso de que el “otro” intente traspasarlos. Cada grupo, sea a favor o en contra de Chávez, tiene sus hitos y sus recorridos bien marcados, y no permite que “el otro” se desplace en estos espacios: cuando uno de estos grupos intenta entrar en el territorio del otro ocurren fuertes enfrentamientos, incluso físicos. Los espacios marcados por estas expresiones sociopolíticas, dentro de la elevada polarización social e ideológica existente, tienden a desdibujar su función urbana original, si no de forma permanente al menos en los momentos en que el conflicto político se activa y se instala en ellos: las autopistas no sirven para que circulen los vehículos en ruta a las actividades cotidianas, sino

para realizar manifestaciones multitudinarias, hacer vigiliass (con tienda de campaña y los enseres de un moderno *camping*) o albergar a las miles de personas en ruta a apoyar o rechazar el régimen; las plazas tampoco sirven para el descanso y la recreación pasiva, sino para expresar el apoyo o el rechazo político al presidente.

Los jóvenes de la clase media que en el pasado siguieron los hábitos norteamericanos de recreación son los primeros en reforzar esta nueva subcultura que incluye no solo las marchas, sino también la vestimenta que se utiliza para asistir a la misma, con colores de la bandera nacional, la música del folclor nacional que las anima y los símbolos y pancartas de sabor nacionalista. El incremento de las relaciones sociales cara a cara y el surgimiento de un espíritu de solidaridad entre iguales socialmente son también parte de esta subcultura de las marchas.

Esta subcultura “patriótica y nacionalista” que ha emergido recientemente en la clase media opositora también difiere de la de la clase pobre en lo que se refiere a la apropiación de los hitos y símbolos espaciales urbanos tradicionales y modernos. En una sociedad fuertemente dividida en clases sociales, los símbolos patrios tradicionales como la plaza Bolívar —en el centro de la ciudad—, el Panteón Nacional —donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar—, el palacio presidencial de Miraflores, la Asamblea Nacional y el paseo Los Próceres, entre otros, han sido apropiados por el sector que apoya al gobierno. Este territorio, que no le pertenece “a la clase media”, según los chavistas, tiene un elevado valor simbólico y patriótico; dentro del imaginario quizá no consciente de los adeptos a Chávez, se encuentra la idea que “solo los chavistas son los dueños de esos símbolos”. También se enfrentan lo tradicional y lo moderno dentro de estos espacios simbólicos, ya que la plaza Altamira, las autopistas Francisco Fajardo y Prados del Este y los espacios públicos contiguos a las grandes edificaciones, como la sede de PDVSA en Chuao —que son los espacios de protesta de la clase media y alta—, representan los símbolos de la moderna cultura petrolera.

Otro de los elementos que caracterizan a la ciudad de Caracas en la década 2000-2010 es el “caos urbano”, el cual no solo es producto de las múltiples y diarias movilizaciones y protestas (Provea, 2010) que congestionan el tráfico vehicular y dificultan el desempeño de las actividades urbanas, sino también de la falta de aplicación de las normas, reglas y regulaciones urbanas existentes por parte de los organismos encargados del ordenamiento de la ciudad y de la carencia de una cultura cívica ciudadana, pues se “protesta” pero no se aportan soluciones. A la escasez creciente y al deterioro de los servicios básicos y de infraestructura debe sumarse el aumento de la inseguridad, que convierte a Caracas en “la ciudad del miedo” (Rotker, 2000), donde los habitantes no se atreven a salir a la calle después del anochecer e incluso en el día, cuando se acuden con temor y reserva a los espacios públicos institucionales por toparse con “el otro”, a quien se ve como el enemigo, puesto que los imaginarios resultantes de la polarización llevan a creer que se puede ser objeto de agresión (Briceño León *et ál.*, 2009).

Organizaciones sociourbanas del socialismo del siglo XXI: Entre la cooptación y la autonomía

Organizaciones de la clase media y alta

A lo largo del proceso de confrontación política contra el gobierno, las organizaciones ciudadanas de clase media y alta dejaron vacío el espacio organizativo de defensa y mejoramiento de las condiciones de vida urbanas, se desdibujaron como organizaciones sociales y se transformaron temporalmente en organizaciones políticas, con la consiguiente pérdida de autonomía. Las organizaciones ciudadanas de clase media que en los años setenta, ochenta y gran parte de los noventa habían hegemonizado la lucha por la democracia participativa a través de Facur (Santana, 1988; Gómez Calcaño, 1987; Garrido y Ramos, 1994; García-Guadilla, 2005), en la década del 2000 tendieron a priorizar sus intereses de clase en las respuestas dadas a la crisis política y urbana; como consecuencia, desarrollaron una faceta antidemocrática.

Un ejemplo de ello fueron las asambleas de ciudadanos creadas en las urbanizaciones de clase media de Caracas después del golpe de Estado del 2002 contra el presidente Chávez, aprovechando la estructura de las asociaciones de vecinos. El objetivo de estas asambleas fue promover marchas y movilizaciones contra el poder ejecutivo, por lo que durante el período 2002-2005 se aliaron con la Coordinadora Democrática, organismo político que tenía como objetivo “sacar a Chávez” del poder (García, 2006; García-Guadilla, 2006). Otro ejemplo a destacar fue el diseño, por parte de las organizaciones ciudadanas de clase media, de los planes de contingencia o de guerra denominados Planes Comunitarios de Defensa Activa, los cuales fueron implementados en la ciudad capital el 23 de enero del 2003 con el objetivo de “repeler al enemigo”, que invadiría los espacios y urbanizaciones en que vivía la clase media. Tales organizaciones implementaron estrategias cuasi militares de defensa —e incluso armadas— que tenían como objetivo proteger los espacios privados del hogar o residencia familiar, el edificio o condominio y la urbanización de los pobres o de las “hordas chavistas” que en su imaginario de exclusión representaban al enemigo (García-Guadilla, 2003). A corto plazo, estas confrontaciones, alianzas e imaginarios de exclusión tuvieron profundos impactos en la dinámica social urbana de la capital, particularmente durante el período 2002-2005; a mediano plazo, sus efectos fueron reforzar las tendencias de privatización de los espacios públicos de las urbanizaciones de clase media y alta, y la segregación según clase social e ideología en Caracas.

Organizaciones populares

Las luchas urbanas populares se intensificaron a partir de la crisis de los ochenta debido a la falta de una política integral dirigida a tales sectores y a las medidas de corte neoliberal que se tomaron, incluyendo la privatización de los servicios urbanos básicos. Desde los ochenta hasta fines de los 90, los sectores populares organizaron sus luchas alrededor del acceso a los servicios básicos y a la vivienda. Sin embargo, la mayor parte

de las organizaciones sociales que surgieron en los sectores populares en los años setenta, ochenta y noventa para luchar contra la carencia y o escasez de los servicios básicos y de infraestructura social y para mejorar el hábitat nacieron ligadas a los partidos políticos de turno y tendieron a desdibujarse como tales en la medida que aquellos fueron perdiendo legitimidad y requirieron adeptos y los cooptaron de las organizaciones preexistentes.

En la década del 2000, bajo el estímulo del propio presidente Chávez y del lema de la democracia participativa y protagónica, se desarrollaron nuevas formas asociativas territorializadas, tales como los Círculos Bolivarianos (Hawkins y Hansen, 2006), las Mesas Técnicas del Agua (Arconada, 2005; Lacabana y Cariola, 2005), los Comités de Tierra Urbana (Antillano, 2005; García-Guadilla, 2007) y los Consejos Comunales (García-Guadilla, 2008), que, si bien originalmente tuvieron como objetivo el mejoramiento del hábitat, apuntaron hacia la construcción del “poder popular”. Se trata de organizaciones de base territorial cuya conformación tiene impactos positivos y negativos en la configuración espacial y social y en el proceso de toma de decisiones sobre el espacio local de Caracas.

Dos de las organizaciones más importantes en términos de los impactos espaciales y en la dinámica urbana son los Comités de Tierra Urbana (CTU) y los Consejos Comunales (CC). Los CTU son nuevas formas de organización de los sectores populares creados mediante el Decreto Presidencial 1666 (2002), de manera de regularizar la tenencia de la tierra y garantizar el derecho a la vivienda que sanciona la Constitución de 1999. Según la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tierra (2006), para el año 2006 existían casi seis mil CTU con presencia en la mayor parte de los barrios pobres del país y con una cobertura cercana al millón de familias (García-Guadilla, 2007). Constituyen una de las organizaciones sociales de base popular con mayor trayectoria, ya que en gobiernos anteriores se dieron frecuentes movilizaciones y formas organizativas de la población afectada por estos problemas. Al igual que en el pasado, los CTU defienden los derechos constitucionales de ciudadanía mediante las demandas del “derecho a la ciudad, al hábitat y a

una vivienda digna". Según los estatutos, son espacios privilegiados de la democracia participativa, ya que a nivel formal deben ser democráticos en su estructura y funcionamiento, mientras que las decisiones importantes, incluyendo su propia constitución, deben tomarse en asambleas de ciudadanos. Las reivindicaciones asociadas al territorio que hacen los CTU llevan a que el espacio se convierta en uno de los elementos que proporciona identidad a la pluralidad de personas diversas; a su vez, la identidad sociocultural se basa en el rescate de "la forma de vida propia", lo que significa que se reivindica el barrio como la forma legítima de vida social y de ocupación del espacio (Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana de Caracas, 2004).

Los CC fueron dirigidos a todos los sectores y clases sociales, mientras que las Mesas Técnicas del Agua y los CTU se centraron en los sectores populares en los que existían carencias de servicios y problemas con la tenencia de la tierra en que se construyó la vivienda. Si bien los CC se propusieron formalmente como el sustituto de las formas de organización ciudadana preexistentes (asociaciones de vecinos de la clase media o juntas de promoción o de desarrollo en los sectores populares), estos han florecido mayormente en los sectores populares, pues, además de que la clase media los ve con desconfianza, el gobierno ha excluido sistemáticamente y ha negado la inscripción formal requerida a los CC que no comparten su ideología.

Al igual que los CTU, los CC son organizaciones sociales creadas por iniciativa presidencial para encarnar a un nuevo actor comunitario con capacidad de autodiagnosticar los problemas de su entorno y estimular el fortalecimiento de las comunidades y su arraigo por el espacio geográfico que habitan. Surgieron con motivo de las elecciones de diciembre del 2006 y se los adscribió a la Comisión Presidencial del Poder Popular. A diferencia de los CTU, los CC se dirigieron tanto a los sectores populares como a las clases medias y altas, a pesar de que la respuesta más favorable provino de los sectores populares. Una parte de la clase media vio en ellos el mecanismo para recuperar los espacios locales tradicionalmente defendidos por las asociaciones de vecinos y decidió constituirlos, aunque lo ha hecho más lentamente que los

sectores populares. También a diferencia de los CTU, los CC reciben financiamiento directo por parte del Estado para la autogestión de sus necesidades (García-Guadilla, 2008).

En los CTU, la emergencia de subjetividades socioterritoriales, que generaron identidades basadas en la diversidad cultural, democratización de la sociedad y rechazo a las prácticas populistas del gobierno, garantiza una mayor autonomía y potencial para constituir el “poder popular autónomo”. Supone, además, el enriquecimiento del concepto de ciudadanía debido a la emergencia de subjetividades sociales asociadas con nuevas dimensiones, tales como la inclusión en los aspectos materiales y posmateriales, la igualdad dentro de las diferencias y pluralidad cultural, y la participación en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, en la praxis de la mayoría de los CC se refleja una inclusión que implica la satisfacción de las necesidades básicas y materiales, pero que no contempla las necesidades posmateriales; una equidad identificada con la igualdad formal, difícil de concretar; y una participación que, al concentrarse en lo local, no permite trascender a niveles superiores. Además, los CC no tienen la capacidad de elevarse hacia nuevas formas de ciudadanía ni de construir un poder popular autónomo que fundamente la democracia participativa y protagónica, debido al alto potencial de ser cooptados por los actores afines al proceso bolivariano; reflejan, más bien, un “poder popular tutelado por el Estado”.

Dado que los impactos de estas organizaciones deben evaluarse en un plazo más largo, concluiremos el capítulo señalando que los actores urbanos y las organizaciones ciudadanas, si bien tienen el potencial y disponen de los mecanismos jurídico-constitucionales para participar en la gestión de los derechos de ciudadanía, también tienen limitaciones por la cooptación gubernamental de las organizaciones afines ideológicamente al gobierno, por la exclusión de que son objeto las organizaciones de la oposición y, sobre todo, por la polarización existente que se expresa en el uso, la distribución y la dinámica socioespaciales.

La Caracas del socialismo del siglo XXI es una ciudad en la que las tensiones democracia-antidemocracia y/o ciudadanización-des

bolivariano está atravesado por las contradicciones que implican una propuesta de transformación social dentro de una sociedad profundamente polarizada. Esto se refleja principalmente en el espacio urbano, en los actores que lo conforman, en la dinámica urbana y en las organizaciones sociales ciudadanas. Por lo tanto, se requiere superar tal polarización si se desea hacer realidad la Constitución de 1999; es decir, democratizar el espacio público y estimular los derechos de ciudadanía.

Bibliografía

- Acosta, Maruja (1973). "Urbanización y clases sociales en Venezuela". *Revista Interamericana de Planificación*, Vol. 7, N.º 26: 22-44.
- Almandoz, Arturo. (1997). *Urbanismo europeo en Caracas (1870-1940)*. Caracas: Fundarte/Equinoccio.
- Álvarez Itriago, Rosángel (2010). "Participación ciudadana en la creación del Distrito Capital durante el proceso constituyente venezolano de 1999". *Cuadernos del Cendes*, Año 27, N.º 75: 25-50.
- Antillano, Andrés (2005). "La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: La experiencia de los Comités de Tierras Urbanas". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 11, N.º 3: 205-218.
- Arconada, Santiago (2005). "Seis años después: Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Aguas". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 11, N.º 3: 187-204.
- Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana de Caracas (2004). *Democratización de la ciudad y transformación urbana: Propuesta de los CTU a la Misión Vivienda*. Caracas: OTNRTT/Vicepresidencia de la República.
- Briceño León, Roberto y otros (2009). *Inseguridad y violencia en Venezuela. Informe 2008*. Caracas: Alfa.
- Brito Figueroa, Federico (1987). *Historia económica y social de Venezuela*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

- García, Elba Julieta (2006). "¿Continuidad o no de la participación ciudadana?: Las asambleas de ciudadanos en Caracas". *Disertación de maestría en Ciencia Política, Universidad Simón Bolívar* (USB), Caracas.
- García Danglades, Antonio Guillermo (2004). "La 'guarimba', delito común y crimen contra la paz". *Aporrea*, N.º 3, goo.gl/8p6Cc (visitada el 20 de abril del 2006).
- García-Guadilla, María Pilar (ed.) (1991a). *Ambiente, Estado y sociedad. Crisis y conflictos socioambientales en América Latina y Venezuela*. Caracas: Universidad Simón Bolívar/Centro de Estudios del Desarrollo.
- García-Guadilla, María Pilar (1991b). "Crisis, actores y conflictos sociopolíticos en la Venezuela postsaudita". *Argos*, N.º 14: 1-18.
- García-Guadilla, María Pilar (1994). "Configuración espacial y movimientos ciudadanos". En *Las ciudades hablan. Identidades y movimientos sociales en seis metrópolis latinoamericanas*, Tomás R. Villasante (coord.): 51-69. Caracas: Nueva Sociedad.
- García-Guadilla, María Pilar (1997). "Crisis, descentralización y gobernabilidad en el área metropolitana de Caracas". *América Latina Hoy*, Vol. 15: 43-48.
- García-Guadilla, María Pilar (1998). "Ajuste económico, desdemocratización y procesos de privatización de los espacios públicos en Venezuela". *Revista Interamericana de Planificación*, Vol. 30, N.º 119-120: 77-89.
- García-Guadilla, María Pilar (2003). "Territorialización de los conflictos sociopolíticos en una ciudad sitiada: Guetos y feudos en Caracas". *Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*, N.º 136-137: 421-440.
- García-Guadilla, María Pilar (2005). "La sociedad civil venezolana (1961-2004): Institucionalización de nuevas ciudadanías y luchas por la democracia". En *Lectura sociológica de la Venezuela actual II*: 84-120. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
- García-Guadilla, María Pilar (2006). "Organizaciones sociales y conflictos sociopolíticos en una sociedad polarizada: Las dos caras de la democracia". *América Latina Hoy*, Vol. 42: 37-60.
- García-Guadilla, María Pilar (2007). "Ciudadanía y autonomía en las organizaciones sociales bolivarianas: Los Comités de Tierra Urbana

- como movimientos sociales". *Cuadernos del Cendes*, Año 24, N.º 66: 43-73.
- García-Guadilla, María Pilar (2008). "La praxis de los consejos comunales: ¿Poder popular o instancia clientelar?". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 14, N.º 1: 125-151.
- García Sánchez, Pedro José (2004). "La forme privative de l'urbanité: Emprise sécuritaire et homogénéisation socio-spatiale à Caracas". *Espace Géographique*, N.º 2: 1-17.
- García Sánchez, Pedro José y Marc Villá (2001). "De la sociabilidad vigilante a la urbanidad privativa. Homogeneización residencial, usos citadinos y ciudadanía en Caracas". *Perfiles Latinoamericanos*, N.º 19: 57-82.
- Garrido, Francisco y María Luisa Ramos (1994). "Tejido social y organización comunitaria en Caracas". En *Las ciudades hablan. Identidades y movimientos sociales en seis metrópolis latinoamericanas*, Tomás R. Vilasante (coord.): 71-89. Caracas: Nueva Sociedad.
- Gasparini, Graziano (1968). "Formación de ciudades coloniales en Venezuela". *Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas (CIHE)*, N.º 10: 9-43.
- Gasparini, Graziano (1978). *Caracas, la ciudad colonial y guzmancista*. Caracas: Ernesto Armitano Editores.
- Gasparini, Graziano (1991). *Formación urbana de Venezuela en el siglo XVII*. Caracas: Armitaño Editores.
- Geigel Lope-Bello, Nelson (1979). *La defensa de la ciudad*. Caracas: Instituto de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad Simón Bolívar.
- Gómez Calcaño, Luis (1987). *Crisis y movimientos sociales en Venezuela*. Caracas: Tropykos.
- Hardoy, Jorge (1972). *Las ciudades en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.
- Hawkins, Kirk y David Hansen (2006). "Dependent society: The *Círculos Bolivarianos* in Venezuela". *Latin American Reserch Review*, Vol. 41, N.º 1: 102-132.
- Lacabana, Miguel y Cecilia Cariola (2005). "Construyendo la participación popular y una nueva cultura del agua en Venezuela". *Cuadernos del Cendes*, Año 22, N.º 59: 111-133.

- López Maya, Margarita (2005). *Del Viernes Negro al Referendo Revocatorio*. Caracas: Alfa.
- López Maya, Margarita y Luis Gómez Calcaño (1989). *Del pacto de Punto Fijo al pacto social: Desarrollo y hegemonía en Venezuela*. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica.
- Lozada, Mireya (2008). "¿Nosotros o ellos? Representaciones sociales, polarización y espacio público en Venezuela". *Cuadernos del Cendes*, Año 25, N.º 60: 89-105.
- Provea (2010). *Informe anual de derechos humanos 2010*. Caracas: Provea.
- Rotker, Susana (ed.) (2000). *Ciudadanías del miedo*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Santana, Elías (1988). *El venezolano ante la crisis*. Caracas: Amón.
- Santana, Elías (1993). *El poder de los vecinos*. Caracas: Ecotopia.
- Zawisza, Leszek (1968). "Fundación de las ciudades latinoamericanas". *Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas (CIHE)*, N.º 13: 88-128.
- Zawisza, Leszek (1997). "Urbanismo". En *Diccionario de la Historia de Venezuela*. Tomo IV: 143-158. Caracas: Fundación Polar.